



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-012-2016-01506-01 (O2-23-041)
Accionante: LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO
Accionada: AFP PORVENIR S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Procedencia: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 104
Asunto: BONO PENSIONAL – COMPATIBILIDAD PENSIÓN MAGISTERIO

En Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-012-2016-01506-01 (O2-23-041), instaurado por LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO, en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COLPENSIONES E.I.C.E. y la AFP PORVENIR S.A., con el fin de resolver el recurso de apelación que fuera propuesto por LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 04 de septiembre de 2020 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en procura de obtener la emisión y pago del bono pensional con destino a su CAI en la AFP PORVENIR S.A., y, en consecuencia, disponer que esta última administradora reconozca la devolución de saldos de manera completa.

En respaldo de sus aspiraciones señaló que nació el 19 de abril de 1954 y se afilió al entonces Instituto de Seguros Sociales para la cobertura de los riesgos de IVM a partir del 26 de julio de 1979. Indicó que, cotizó a la administradora del RPMPD durante el periodo comprendido entre el 26 de julio de 1979 y 30 de septiembre de 1999, un total de 645,57 semanas como empleado del sector privado. Acotó que, prestó sus servicios como docente nacionalizado entre los años 1983 y 2015, tiempo de servicio que le permitió acceder a una pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional Antioquia. Que posteriormente se afilió al RAIS representado por la AFP PORVENIR S.A., donde actualmente permanece vinculado. Aclaró que durante el tiempo que laboró al servicio de empleadores del sector privado, efectuó cotizaciones al ISS y a la AFP PORVENIR S.A.

Puso de presente que la administradora del RAIS negó el derecho pensional bajo el argumento de no satisfacer los requisitos previstos para ello, concediendo en su lugar la suma de \$46.920.660 por concepto de devolución de saldos; precisando que dentro de dicho guarismo no se encuentra inmerso el valor del bono pensional por los tiempos cotizados al RPMPD.

Finalmente, advirtió que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en lo sucesivo, MINHACIENDA, se negó a emitir el bono pensional por motivo de la figura de la multifiliación, en tanto se encontraba adscrito el RAIS y al régimen exceptuado de los docentes.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 25 de enero de 2017 (págs.40 y 41, doc.01, carp.01 y se notificó a las demandadas MINHACIENDA y al AFP PORVENIR S.A. el 22 de marzo de 2017 y el 28 de abril de esa anualidad (págs. 44 y 73, doc.01, carp.01); dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 03 de febrero de 2017 (pág.42 y 43, doc.01, carp.01).

La cartera ministerial convidada a juicio se opuso a la prosperidad de los pedimentos y aceptó como ciertos los hechos relativos a los aportes pagados por el quejoso al RPMPD y la respuesta brindada a la reclamación administrativa que le fuera presentada, manifestando no constarle la veracidad de los demás. Para respaldar la tesis de su defensa, propuso las excepciones perentorias que designó inexistencia de obligación a cargo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconocimiento del respectivo beneficio pensional a

cargo del ISS (hoy Colpensiones) y no de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la genérica (págs.45 a 72, doc.01, carp.01).

La encartada AFP PORVENIR S.A., a pesar de no refutar las súplicas de la demanda, sí formuló los medios exceptivos de falta de causa para pedir en contra de la AFP, inexistencia de la obligación demandada y pago (págs.81 a 129, doc.01, carp.01).

Por considerarlo necesario, la *a quo* dispuso la integración del contradictorio con COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.40 y 41, doc.01, carp.01), entidad oficial que aceptó la afiliación del pretensor al RPMPD, el estatus de pensionado y la respuesta a la reclamación administrativa radicada. Como medio de defensa postuló las excepciones de fondo de inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido y la genérica (págs.132 a 159, doc.01, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 04 de septiembre de 2020 (docs.08 y 11, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió “...CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, pagar con destino a PORVENIR S.A, dentro de los términos establecidos en la Legislación vigente que regula la materia, el bono pensional tipo A -2 a que tiene derecho el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO por el tiempo en que realizo (sic) aportes al Instituto de Seguros Social hoy Colpensiones, para que haga parte del capital depositado en su cuenta de ahorro individual correspondiente a las cotizaciones del 26 de julio de 1979 al 30 de septiembre de 1999.”; no sin antes ordenar a la AFP PORVENIR S.A. proceder a reconocer la devolución de los saldos que reposen en la CAI del señor VÉLEZ CASTAÑO, una vez reciba los recursos representados en el bono pensional.

Asimismo, absolvió a COLPENSIONES E.I.C.E. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, declarado probados a su favor, los hechos sustento de la excepción de inexistencia de la obligación.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de exponer el contenido y alcance de las disposiciones legales que regula la prestación subsidiaria de la devolución de saldos y la redención del bono pensional al que tenga derecho el afiliado, estimó que este asunto ha sido previamente analizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha establecido que los tiempos de servicio que no hayan sido fuente o sustento de la pensión reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, bien pueden conformar los recursos que financien el bono pensional y su

liquidación a favor del pretensor, dada su manifiesta compatibilidad con la calidad de pensionado del régimen exceptuado.

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial de MINHACIENDA, se mostró en desacuerdo con la emisión y liquidación del bono pensional que dispensó el *a quo*, solicitando con la apelación se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se denieguen la totalidad de las pretensiones formuladas.

Con tal propósito recordó que por la naturaleza del bono pensional en sí mismo, este se integra a los recursos que provienen de la Nación y no de las cotizaciones sufragadas por el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO, máxime cuando estos aportes siempre han permanecido en el fondo común del RPMPD, concluyendo que, de mantener intacta la orden impartida por el fallador de la primera instancia, se incurre en una infracción directa a la prohibición prevista en el artículo 128 de la CP.

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de MINHACIENDA, la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor del antedicho ministerio, en los puntos que no fueron objeto de alzada.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación y el Grado Jurisdiccional de Consulta fueron admitidos el 21 de febrero de 2022 (doc.18, carp.02), y mediante proveído del día 28 siguiente (doc.19, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El procurador judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.22, carp.02), en sus alegaciones recaba se confirme la sentencia impugnada y se mantenga indemne a su representada, pues considera que de cara a las normas que reglan la emisión y liquidación de los bonos pensionales, es responsabilidad del fondo de pensiones adscrito al RAIS, como administradora legitimada, iniciar la gestión correspondiente con miras a determinar la viabilidad de solicitar el bono complementario.

La gestora judicial de la AFP PORVENIR S.A., insistió en la imposibilidad de emitir el bono pensional echado de menos por el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO, así como tampoco se encuentra dentro de sus facultades impartir dicha orden a la Oficina de Bonos Pensionales de MINHACIENDA; para con ello afirmar que “...*existe imposibilidad jurídica por parte del fallador de imponer condena en su contra a dar cumplimiento a una obligación que no está a su alcance desde las perspectivas legal y material*” (doc.23, carp.02).

El señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO sostuvo que la sentencia de instancia debe ser confirmada en su integridad, en razón de que el régimen pensional de los docentes es de los considerados como exceptuados conforme con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y siendo ello así, el derecho pensional que actualmente disfruta es compatible con las prestaciones que se deriven del SGSSP (doc.24, carp.02). A su turno, el poderhabiente judicial de MINHACIENDA dentro del término legal guardó silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por MINHACIENDA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada además de ocuparse de los puntos de inconformidad materia de alzada, se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la cartera ministerial llamada a juicio, en los puntos en los que no fueron objeto de impugnación.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: ¿Si es procedente la emisión de un bono pensional teniendo en cuenta las semanas cotizadas por el actor al RPMPD? De ser así, ¿Debe condenarse a MINHACIENDA a la redención de un bono pensional por dichas cotizaciones?

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será **modificatorio**, en relación con el término concedido por el *a quo* para la emisión, liquidación y traslado a la CAI del actor, y **confirmatoria** en lo demás, en tanto las prestaciones económicas periódicas a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio son compatibles con las reconocidas en el RAIS, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO nació el 19 de abril de 1954 y cotizó al RPMPD un total de 645,57 semanas, entre el 26 de julio de 1979 y el 30 de septiembre de 2009 (págs.15 a 20, doc.01, carp.01); que a través de la Resolución 33836 del 27 de septiembre de 2004, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció la pensión de jubilación por haber prestado sus servicios como docente nacionalizado por más de 20 años (págs.21 a 23, doc.01, carp.01); que el derecho pensional se concedió a partir del 20 de abril de 2004 y en cuantía inicial de \$1.251.611 con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (págs.21 a 23, doc.01, carp.01); que el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO se afilió al RAIS y totalizó a órdenes de la AFP PORVENIR S.A. 968 semanas (págs.24 a 25, doc.01, carp.01); que el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO prestó sus servicios a favor de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia – I.E. Pedro Luis Álvarez Correa, desempeñando el cargo de Docente de Aula Grado 14 a partir del 12 de abril de 1983 (pág.26, doc.01, carp.01), y que el 06 de julio de 2016 la AFP PORVENIR S.A. reconoció al accionante la suma de \$46.920.660 por concepto de devolución de saldos (pág.29, doc.01, carp.01).

2.3.1. Afiliación y aportes pensionales del docente oficial al Sistema General de Pensiones.

Ab initio, ha de resaltarse que al impetrante le fue reconocido el estatus de pensionado por FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, mediante Resolución n.º 28287 del 4 de agosto de 2003, la cual le reconoció una pensión vitalicia de jubilación como docente nacional retroactivamente desde el 17 de septiembre de 2002 (doc. 01 pág. 29 a 33). Ahora, si bien es cierto los docentes oficiales están excluidos del Sistema Integral de Seguridad Social en virtud de lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no es menos cierto que tal calidad no les impide prestar sus servicios a instituciones de naturaleza privada y en virtud de ello, financiar una posible pensión de vejez dentro del sistema general de pensiones consagrado en la citada ley, ya sea en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) o en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Lo dicho, se infiere del contenido del artículo 31 del Decreto 692 de 1994, que posibilita a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y que además reciben remuneraciones del sector privado, acumular cotizaciones como docentes oficiales con cotizaciones del sector privado para que sean administradas por dicho fondo especial o por cualquiera de las administradoras de pensiones del RAIS o del RPMPD. Y visto que el decreto en cita reglamenta la Ley 100 de 1993, se colige que si los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, paralelamente laboran para una persona jurídica de carácter privado o natural, pueden válidamente afiliarse a una administradora de pensiones del RAIS o del RPMPD y cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen especial, accederán a las prestaciones propias del mismo.

Tal es el entendimiento que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha propalado sobre este ítem, precedente reiterado más recientemente en sentencia SL2383-2022, en la cual también se abordó un caso de contornos similares al actual, y en la cual se asuntó que *“(…) el demandante podía prestar sus servicios a establecimientos educativos de naturaleza pública y obtener una pensión de jubilación oficial, y, simultáneamente, laborar para instituciones pedagógicas particulares para aspirar a cualquier prestación propia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, y tal como ocurrió en el sub lite, cotizar al ISS y es válido que dichos aportes se trasladen al RAIS a través de un bono pensional.”*

En este punto, cumple precisar, que si bien el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, en la aplicación de dicha normativa, lo cierto es que según el mandato previsto en el

artículo 17 de la Ley 100 de 1993, la calidad de exceptuados del Sistema de Seguridad Social integral no exime al empleador privado de la obligación de realizar las cotizaciones al sistema general en pensiones cuando contrata a un trabajador, aún bajo el supuesto de que pertenezca al régimen de los docentes oficiales, como sucedió en el asunto bajo examen, en el que diferentes empleadores de derecho privado le aportaron en pensiones al pretensor desde el 26 de julio de 1979 al extinto ISS, y luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP PORVENIR S.A.

Definido lo anterior, el periodo de cotizaciones al ISS que debe tenerse en cuenta para calcular el bono pensional del actor, corresponde al que se encuentra reportado en su historia laboral, observándose al efecto en dicha documental se observa que el demandante aportó en pensiones desde el 26 de julio de 1979 y el 30 de septiembre de 2009 (págs.16 a 20, doc.01, carp.01), por lo que *prima facie*, sería dicho periodo de cotizaciones por el que se causaría el bono pensional, tal y como lo indicó el *a quo* en el fallo que se revisa.

2.3.2. Inclusión del bono pensional causado por aportes al extinto Instituto de Seguros Sociales en la cuenta de ahorro individual.

En este contexto, una interpretación sistemática de los artículos 66, 113, 118 119 y 121 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 1° del Decreto 1299 de 1994, permite concluir que la cuenta de ahorro individual incluye los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar, y, por tanto, dicho título pensional debe formar parte del capital del afiliado acumulado.

A más de lo anterior, tenemos que con el advenimiento del Sistema General de Pensiones regulado por la Ley 100 de 1993, el sistema de financiación del fondo común del RPMPD y de las cuentas de ahorro individual del RAIS se estructura sobre la base de contribuciones bipartitas de empleadores y trabajadores, dejando al Estado por fuera del aporte, dando lugar a la posibilidad del disfrute de dos prestaciones económicas por vejez: una de jubilación proveniente del Tesoro Nacional (fuere la pensión gracia o la vitalicia de jubilación) y la otra a cargo del RPMPD o del RAIS, en los casos en que una misma persona prestó sus servicios a entidades públicas con regímenes exceptuados y a empleadores del sector privado.

Criterio que se afinsa también en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, y que dispone: “*m) Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran*”; permitiéndose que una persona puede percibir dos prestaciones pensionales, una del régimen magisterial y otra del sistema general de pensiones,

siempre que los aportes que causan cada prestación provengan de fuentes de financiación diferentes.

En el caso de autos, se resalta que las cotizaciones que se pretende ser compensadas a través del bono pensional, fueron efectuadas al extinto ISS en virtud de los servicios prestados por el impulsor del juicio a empleadores de derecho privado como SUMAR LTDA, FRANCO Y VELEZ Y CIA, COLEGIO CALASANZ FEMENINO y PÍO INSTITUTO HIJOS DE MARÍA (págs.16 a 20, doc. 01, carp.01); y no corresponden en lo absoluto a los tiempos de servicio que sirvieron de base para el reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación por parte de Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En síntesis, se tiene que dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del afiliado, debe incluirse el bono pensional causado por aportes al extinto Instituto de Seguros Sociales, a pesar de tratarse de una persona que ha sido afiliada a un régimen exceptuado, puesto que los aportes que sirven para la financiación del bono pensional no tienen origen en fondos de naturaleza pública sino que son realizados por empleador y trabajador, y porque las prestaciones económicas reconocidas por el Sistema General de Pensiones deben comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, y que sirven de soporte financiero a la prestación económica a que tenga derecho.

Ello así, la pensión de vejez o la devolución de saldos en el RAIS y el Bono Pensional son dos asignaciones o rubros completamente diferentes respecto de la pensión vitalicia de jubilación o de la pensión gracia del régimen exceptuado del magisterio, de acuerdo con su fuente: una se deriva de los servicios prestados al Estado; y otra de los aportes al Instituto de Seguros Sociales por haber cotizado como trabajador dependiente al servicio de empleadores del sector privado.

Conforme lo expuesto, la afiliación y las cotizaciones del impetrador al RPMPD fueron plenamente válidas y compatibles con su afiliación como docente nacional adscrito a la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia – I.E. Pedro Luis Álvarez Correa, pues se itera, si bien las prestaciones pensionales de los docentes oficiales están a cargo del Estado, lo cierto es que las mismas se afincan en tiempos de servicios ajenos a las cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones, y por ende, procede el bono pensional por la prestación de servicios en el sector privado, lo que impone impartir confirmación a la sentencia de primera instancia, en cuanto ordenó incluir el valor del bono pensional en la cuenta devolución de saldos.

2.3.3. Entidad competente para emitir y redimir el bono pensional con destino a la cuenta de ahorro individual por cotizaciones al RPMPD.

En cuanto al trámite del bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales, tenemos que aquel debe ser emitido por la NACIÓN, toda vez que el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO estuvo afiliado al ISS a partir del 26 de julio de 1979 (págs.16 a 21, doc.01, carp.01), es decir, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, atendiendo a las previsiones del literal A) del artículo 14 y el artículo 16 del Decreto 1299 de 1994, en armonía con el primer inciso del artículo 2° del Decreto 3798 de 2003, cuyo texto se trasunta en lo pertinente:

“Artículo 14º Emisor y contribuyentes. Los bonos pensionales serán emitidos: a. Por la Nación en los casos de que trata el artículo 16 del presente Decreto”.

“Artículo 16º Decreto 1299 de 1994 Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación. La Nación emitirá el bono pensional a los afiliados al sistema general de pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra caja, fondo o entidad del sector público sustituido por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades. Los bonos a cargo de la Nación se emitirán con relación a los afiliados de las entidades anteriormente citadas que estuviesen vinculados con anterioridad al 1 de abril de 1994. (...)”

De otro lado, respecto de que las cotizaciones efectuadas a partir del 1º de abril de 1994, ha de precisar la Sala que éstas deben ser sufragadas con dineros del Fondo Administrado por el extinto ISS, hoy Colpensiones, empero, se relleva que aún en tal entendido la Nación sigue siendo la obligada a la expedición de los bonos pensionales por dichos periodos, y de su redención, esto es, del pago a quien sea el legítimo tenedor del instrumento por medio del cual se libera y se hace efectivo como mecanismo financiero destinado a conformar el capital necesario para financiar una prestación.

Por manera que sigue siendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el competente para pagar dicho título pensional, correspondiéndole a Colpensiones compensar a Minhacienda los valores de las cotizaciones en el citado periodo, pero no pagarlos directamente a la AFP. Así se desprende del contenido del artículo 2 del Decreto 3798 de 2003, del que se trasunta el apartado pertinente:

“Artículo 2º. Pago de cuotas partes a cargo del ISS en bonos pensionales tipo A. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-ley 1299 de 1994, cuando la Nación tenga la calidad de emisor de bonos tipo A, podrá pagar por cuenta del Instituto de Seguros Sociales, ISS, el valor correspondiente a la deuda imputable por concepto de cuotas partes de bono, que se originen en tiempos cotizados a partir del primero de abril de 1994 y hasta la fecha del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En el evento en que la Nación haya efectuado el pago de las cuotas partes por cuenta del ISS, dichas sumas serán compensadas con el ISS, de acuerdo con los mecanismos previstos en el presente decreto.”

En cuanto a las etapas del bono pensional, tenemos que la **emisión** ocurre cuando la AFP da a conocer la liquidación provisional al afiliado para que este la apruebe y la firme, luego, la **expedición** se presenta cuando la AFP requiere a la OBP del Minhacienda y mediante acto administrativo motivado y contentivo de los datos básicos y valores calculados a la fecha, ésta expide el condigno bono pensional; la **redención** se da cuando se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores; y finalmente el **pago** se produce cuando se entrega el valor a la AFP y esta procede a depositar tales dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario (T-056 de 2017).

Corolario de lo dicho, resulta palmario para la Sala que el bono pensional debe ser emitido por la Nación según la información obrante en la historia laboral y de acuerdo con las precisiones efectuadas en esta providencia, al tiempo que debe ser expedido y redimido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que el valor de dicho bono sea pagado efectivamente en la cuenta de ahorro individual del afiliado peticionario.

Se sigue de lo anterior y con trascendencia en el asunto, que el artículo 2.2.16.1.22 del Decreto 1833 de 2016 prevé que “[e]l emisor pagará el bono a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a la fecha en la cual reciba de éste la solicitud de pago en la forma que el emisor haya establecido. Para los bonos tipo A con redención normal no se requiere solicitud y se pagarán dentro del mes siguiente a FR”; de no cumplirse este plazo, **el emisor¹ o el contribuyente²**, deberá, según corresponda, reconocer de manera automática y a título de sanción, intereses de mora a partir de la fecha límite, a la tasa establecida en la fórmula contenida en el artículo 2.2.16.1.12 ídem. Por consiguiente, se modificará la sentencia de primera instancia para precisar que la cartera ministerial demandada, deberá pagar el bono a órdenes de la AFP PORVENIR S.A., dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente sentencia.

Sin más puntos de inconformidad por resolver en sede de apelación y agotado el estudio integral de la decisión bajo el Grado Jurisdiccional de Consulta, es menester modificar la sentencia de primera instancia proferida el 04 de septiembre de 2020 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, para precisar el término otorgado a la Oficina de Bonos Pensionales de MINHACIENDA a fin de que proceda a efectuar el pago del bono pensional a la CAI del señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO y a órdenes de la AFP PORVENIR S.A.

3. COSTAS

¹ La Nación, la administradora del RPMPD, las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; las empresas privadas o públicas, o cajas o fondos de previsión del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.

² Entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional, las que deberán contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención del mismo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en vista de que el fallo fue estudiado bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de MINHACIENDA, no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, el 04 de septiembre de 2020, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y AFP PORVENIR S.A., el cual para todos los efectos quedará así:

SEGUNDO: *CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, pagar con destino a PORVENIR S.A, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, el bono pensional tipo A modalidad 2 a que tiene derecho el señor LUIS EMILIO VÉLEZ CASTAÑO por el tiempo en que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, para que haga parte del capital depositado en su cuenta de ahorro individual correspondiente a las cotizaciones del 26 de julio de 1979 al 30 de septiembre de 1999.*


SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, prohijando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

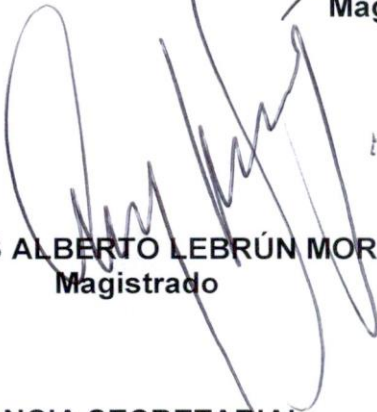
Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUES Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

(sin firma por ausencia justificada)
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario